

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LCSP 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

1) Necesidad e idoneidad del contrato

La presente licitación tiene por objeto contratar una “póliza de seguro de responsabilidad civil y patrimonial para la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras”. La naturaleza y extensión de la necesidad que se pretende satisfacer reside en la necesidad imprescindible de garantizar la responsabilidad civil patrimonial que la Constitución Española, en su artículo 106, consagra como un principio general de las Administraciones Públicas y cuyo régimen viene desarrollado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al mismo tiempo que es atendida la necesidad de dar cobertura a los riesgos imprevisibles en el patrimonio, garantizando el pago de las indemnizaciones que según normativa legal vigente pudieran corresponderle a la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, directa, mancomunada, solidaria o subsidiariamente, por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos ocasionados involuntariamente a terceros por acción u omisión en el ejercicio de su actividad. Dado que el acaecimiento de sucesos que pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidad es impredecible y, por tanto, no se puede conocer por anticipado la obligación de atender a alguna indemnización, gasto o fianza por este motivo, y mucho menos la cuantía de los mismos, no resulta adecuado establecer una dotación presupuestaria anual para esta finalidad, estimándose más conveniente garantizar en todo caso las referidas contingencias mediante la formalización de un contrato de seguro, con el que quedará cubierta dicha responsabilidad.

Se consideran asegurados en este contrato:

1. Todos los empleados públicos, cualquiera que sea su régimen laboral, y altos cargos de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, mientras actúen en el desempeño de sus funciones por cuenta de la Consejería y aunque posteriormente dejen de trabajar para la misma.

Quedan comprendidos en esta condición quienes presten servicio en la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras en comisión de servicios procedentes de otros Centros de la Comunidad de Madrid o de otras Administraciones Públicas, así como el personal autorizado como desplazado temporal en otras Entidades, Centros o Instituciones.

2. Los herederos y familiares de cualquiera de los asegurados anteriores, respecto de las responsabilidades profesionales de estos que les pudieran ser exigibles en caso de producirse su fallecimiento.
3. La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras o la Consejería a la que se atribuyan sus competencias, en caso de cambio de denominación o reestructuración que pudieran ser acordadas con posterioridad. Se considerarán aseguradas como parte de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras todas las unidades que en cada momento estén integradas en la misma, aunque dicha integración se haya producido con posterioridad a la firma del contrato.

2) Clasificación que se exige a los contratistas

Dado que se trata de un contrato de servicios, la clasificación no es un requisito exigible de conformidad con el artículo 77.1.b) LCSP, y por tanto, no se puede requerir con carácter obligatorio para contratos para los cuales no esté prevista su exigencia. Además, el objeto de este contrato no está incluido en el Anexo II del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

3) Criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera (art. 116.4.c) LCSP

Solvencia Económica y Financiera:

Artículo 87.1 a) de la LCSP:

Se acreditará por el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas.

Se exigirá un importe mínimo de 1.000.000 € y se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Solvencia Técnica o Profesional:

Artículo 90.1 a) de la LCSP.

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterios de selección:

Podrán acceder a la adjudicación del contrato las empresas que acrediten que el importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución de los últimos tres años, contados hasta la fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, en servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, alcanza la cantidad de 300.000,00 euros anuales, IVA excluido. A estos efectos, se consideran de igual o similar naturaleza los servicios prestados en contratos con el mismo CPV.

Forma de acreditación:

Los servicios o trabajos realizados, mediante los que se acreditará la solvencia, se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

4) Procedimiento de licitación utilizado

Dado que se trata de un contrato de servicios de los previstos en el artículo 17 LCSP, cuyo valor estimado (calculado de acuerdo con el artículo 101 de la LCSP), es superior a 209.000€, se utiliza el procedimiento abierto (art. 159 LCSP).

Este procedimiento garantiza que la contratación de los servicios se ajuste a los principios de libertad de acceso a la licitación, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores. Teniendo en cuenta el valor estimado del mismo, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.

5) Criterios de adjudicación utilizados

La valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se realizará con arreglo a los criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, que se indican a continuación:

1. Precio

Se valorará el importe de la oferta económica formulada por el licitador: hasta 70 puntos.

2. Oferta técnica: Hasta 30 puntos

1) Aumento del límite de indemnización por siniestro: Se valorará con 3 puntos por cada 500.000 euros adicionales a los límites establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para todas y cada una de las garantías de responsabilidad patrimonial/profesional/explotación/patronal o por accidente de trabajo, con un máximo de 9 puntos. Si no se oferta para todas y cada una de las garantías no se otorgará puntuación.

2) Aumento del límite de indemnización por víctima o lesionado. Se valorará con 3 puntos por cada 50.000 euros adicionales al límite establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con un máximo de 9 puntos.

3) Aumento del límite de indemnización por anualidad: Se valorará con 6 puntos por cada 1.000.000 euros adicionales al límite establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con un máximo de 12 puntos.

En base a los artículos 131.2 y 145.1 de la LCSP, la adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio. El artículo 145.3.g) LCSP dispone que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso en los contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente en esos casos el precio el único factor determinante de la adjudicación. La determinación de varios criterios, se justifica en el hecho de permitir a todo empresario capacitado la presentación de proposiciones, y adjudicar el contrato al licitador que, en su conjunto, efectúe la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio más bajo.

Los criterios citados anteriormente se han formulado de manera objetiva, están vinculados al objeto del contrato, y se consideran los más apropiados para garantizar la efectividad de la

prestación objeto del contrato. En este caso, el precio tiene una puntuación de 70 puntos máximo, ya que se considera que teniendo en cuenta el objeto del contrato, el aspecto económico es el factor fundamental del mismo, y ha de ser valorado en dicha proporción. La oferta técnica, con una puntuación máxima de 30 puntos, tendrá en consideración el aumento de los límites fijados en el PPT, cuantías apropiadas y nada teniendo en cuenta el objeto y naturaleza del contrato.

6) Condiciones especiales de ejecución (artículo 116.4.c) LCSP)

Se establece como condición especial de ejecución del contrato, la obligación de que el adjudicatario asigne a mujeres para gestionar la prestación del servicio objeto del contrato al menos en un porcentaje igual o superior al 40%, evitando así desigualdades entre el hombre y la mujer en el trabajo.

Esta obligación se acreditará mediante la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de la documentación acreditativa correspondiente en el plazo de 15 días desde la firma del contrato.

Las condiciones establecidas tendrán, a efectos de lo dispuesto en el artículo 202, apartado 3 de la LCSP, el carácter de obligaciones contractuales, esenciales, siendo su incumplimiento, causa de resolución según lo dispuesto en la letra f) del artículo 211.

7) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen (artículo 116.4. d) LCSP).

El presupuesto base de licitación se ha fijado en una prima de 2 anualidades de 338.776,00€ en total, y a los efectos de las previsiones del artículo 100 de la LCSP se hace constar la imposibilidad de desglosar pormenorizadamente el indicado presupuesto. De conformidad con lo establecido en los artículos 94 y 95 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las tarifas de primas deben fundamentarse en bases técnicas y en información estadística elaborada de acuerdo con lo dispuesto en dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, pero las primas responden al régimen de libertad de competencia en el mercado de seguros, sin que las tarifas de primas estén sujetas a autorización administrativa.

Por ello, ante la ausencia de índices oficiales, la determinación del importe de la prima del seguro ha de ser resultado de la utilización de un elevado número de parámetros (tanto a la hora de proceder a la valoración del riesgo como de los costes directos e indirectos) y requiere de un análisis concreto con base a criterios que son flexibles y dependen en gran medida de los precios y funcionamiento del mercado asegurador.

Se ha calculado la prima del seguro enumerado en la definición objeto del contrato partiendo de la estimación del riesgo asegurado de lo que se llama la prima pura. Este componente inicial es la resultante de calcular la probabilidad teórica promedio de que ocurra un siniestro y estimar el impacto del valor económico, lo que permite conocer la cuantía media a pagar por cada siniestro. A la prima pura se le suman otras cantidades adicionales por varios conceptos: se suma la prima de inventario que comprende los gastos de gestión y administración interna, orientados a cubrir el coste de toda la operativa interna que supone el seguro para la compañía (incluyendo comisiones, gastos en publicidad, etc.).

También se añade la parte correspondiente al margen de seguridad, para cubrir los casos en que las premisas realizadas en las estimaciones sufran una variación importante: el margen comercial, que le permitirá obtener un beneficio económico; y los gastos de redistribución del riesgo asegurado, coaseguro y reaseguro, en los que incurre la Aseguradora como consecuencia de su actividad.

Se han tenido en cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, tanto la siniestralidad como los precios de adjudicación de las licitaciones anteriores. Sistema de determinación del precio: a tanto alzado (art. 309 LCSP), ya que no es posible o conveniente su desglose o descomposición de forma detallada, teniendo en cuenta la naturaleza objeto de la prestación.

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, con objeto de dar cumplimiento al artículo 100.2 de la LCSP, del presupuesto inicial o prima anual de 169.388,00€, resulta el siguiente detalle:

		costes directos totales	204.544,00 €	
		Costes indirectos totales	115.056,00 €	
		De los costes directos, costes de personal	51.136,00 €	

Una vez calculados todos los costes del contrato, se ha procedido a añadir el 6% de Beneficio Industrial, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 20.1 apartado 16º de

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, están exentas de dicho impuesto las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.

Coste anual del contrato: 169.388 €

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 745.307,20 €

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: se ha tomado como referencia el importe inicial de la póliza por dos años de plazo, estimado en función de los precios habituales de mercado, al que se ha añadido el importe de las posibles prórrogas (2 años) y de un máximo de 20 % en concepto de modificaciones.

Coste total del contrato + (20% modificaciones). + Posibles prórrogas

$338.776 \text{ €} + 67.755,20 \text{ €} + 338.776 \text{ €} + \text{€} = 745.307,20 \text{ €}$

8) Informe de insuficiencia de medios

Para la correcta ejecución de dichos servicios, la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras al no dispone en su plantilla ni del personal especializado ni de los medios técnicos para el desarrollo de dichos trabajos. Las prestaciones objeto del contrato no se encuentran incluidas en la actividad ordinaria que compete al personal adscrito a esta Consejería.

Por todo lo citado anteriormente, y de conformidad con lo que establece el artículo 28 y el artículo 116.4f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, queda justificada la ejecución de la prestación del servicio objeto del contrato a través de una empresa externa especializada en el ramo de esta actividad, con capacitación y cualificación suficiente.

9) Justificación de la no división en lotes

La naturaleza de los riesgos a cubrir mediante la suscripción de la mencionada póliza de seguro y, en consecuencia, del contrato, justifica el no fraccionamiento del mismo en lotes, teniendo en cuenta que el objeto del contrato carece esencialmente de fracciones que gocen de sustantividad propia o sean susceptibles de utilización separada, por lo que resulta inviable proceder a su ejecución independiente.

Madrid, a fecha de firma

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y

ORGANIZACIÓN

Firmado digitalmente por: MARTÍNEZ SÁNCHEZ SALVIO JAVIER
Fecha: 2020 10 26 10:57